



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, tres (03) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: MARTHA ROCIO JIMÉNEZ VARGAS
Demandados: ACP COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. Y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 019 2022 00514 01
Sentencia: S-309

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los **recursos de apelación** interpuestos por la AFP **COLFONDOS S.A. y la ACP COLPENSIONES**, al igual que en grado jurisdiccional de **consulta** en favor de esta última entidad, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el 24 de julio de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARTHA ROCIO JIMÉNEZ VARGAS demandó a COLFONDOS S.A, a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la

ineficacia del traslado, con el fin de dejar sin efectos la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS-, y se disponga el regreso automático a COLPENSIONES sin solución de continuidad.

En consecuencia, solicita se ordene a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES todos los valores de la cuenta de ahorro individual, como las cotizaciones con los rendimientos causados incluidas las comisiones de administración de la cuenta y el porcentaje deducido para garantía de pensión mínima, y a COLFONDOS S.A., los gastos de administración durante el período que estuvo afiliada a este fondo.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que cotizo en pensiones al Instituto de Seguros Sociales desde el 9 de agosto de 1989 hasta el 31 de octubre de 1997; que a finales de octubre de 1997 se trasladó de régimen pensional, suscribiendo el formulario de afiliación a COLFONDOS S.A.; que se trasladó en abril de 2003 a el fondo ING, el cual fue absorbido por PROTECCIÓN S.A.; que no fue debidamente asesorada al momento de los traslados de fondo, pues nunca le explicaron cómo construir su pensión, ni las modalidades existentes, entre otras características; que nació el 13 de julio de 1965; que no fue reasesorada antes de cumplir los 47 años de edad y que el 12 de diciembre de 2022 intentó regresar al Régimen de Prima Media radicando el formulario en COLPENSIONES, sin embargo la entidad contesta que no era procedente, debido a que estaba a 10 años o menos para cumplir el requisito del tiempo para pensionarse.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES admite que la demandante estuvo afiliada al ISS entre el 9 de agosto de 1989 hasta el 31 de octubre de 1997, que a finales de octubre de 1997 se trasladó de régimen, como también que en el 2003 se trasladó al fondo ING, hoy PROTECCIÓN S.A.; que

es cierta la fecha de nacimiento y la radicación del formulario de afiliación. Indica que no le consta que información se le dio a la actora al momento de los traslados de régimen, como tampoco si la demandante conocía o no la restricción para el traslado de régimen. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones invocadas por la parte demandante, puesto que carecen de fundamentación fáctica, legal y probatoria. Y como excepciones planteó inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe por parte de COLPENSIONES, imposibilidad de que COLPENSIONES decrete la ineficacia del traslado, improcedencia de la declaratoria de invalidez del traslado, presunción de legalidad de los actos jurídicos, falta de legitimación en la causa por pasiva, imposibilidad de condena en costas, equilibrio financiero del sistema, prescripción y compensación.

PROTECCIÓN S.A. en su contestación expuso que no le consta la afiliación de la demandante al ISS como tampoco la afiliación realizada a COLFONDOS S.A.; que por parte de este fondo se le brindó una asesoría integral al momento del traslado, y además la demandante tuvo varias oportunidades de retornar al Régimen de Prima Media, y no lo realizó. Se opone a todas y cada una de las pretensiones, debido a que el acto jurídico de traslado es existente, válido, exento de vicios del consentimiento y de cualquier fuerza para realizarlo. Propuso como excepciones inexistencia de obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y el Sistema General de Pensiones, reconocimiento de restitución mutua a favor de la AFP, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derecho de terceros de buena fe, innominada, aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento al caso concreto, y traslado de la totalidad de los aportes.

COLFONDOS S.A. en su contestación expone que, no le consta si la demandante estuvo afiliada con anterioridad a ISS, ni el traslado a ING

hoy PROTECCIÓN S.A., como tampoco la radicación del formulario de afiliación en COLPENSIONES; que no es cierta la afirmación realizada por la actora sobre la información errónea dada al momento de los traslados, ya que sí se le suministro la información necesaria. Se opone a todas las pretensiones de la demanda. Propuso como excepciones inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, ratificación de la afiliación de la actora al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A., prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, y compensación y pago.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 24 de julio de 2023, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia o la vinculación de la demandante del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, teniéndose para todos los efectos afiliada sin solución de continuidad al primero de ellos; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a aceptar el regreso de la actora a esta entidad; **ORDENÓ** a PROTECCIÓN a trasladar a COLPENSIONES los valores recibidos en razón de la afiliación de la demandante, como lo son las cotizaciones obligatorias, rendimientos, gastos de administración y comisiones, sin incluir los valores de los seguros previsionales; **ORDENÓ** trasladar a COLFONDOS S.A. los gastos de administración y comisiones; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a recibir estos dineros para que su equivalente en semanas se vea reflejada en las historias laborales; y **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A., y absuelve a las demandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLFONDOS S.A. interpuso recurso de apelación de forma parcial con el fin de que no se

traslade a COLPENSIONES los conceptos pretendidos sobre los gastos de administración, debido a que no existe razón jurídica para la devolución de los mismos, puesto que el juzgador no puede desconocer los hechos relevantes ocurridos, así como las circunstancias que rodearon el traslado de la actora y los efectos de este, pues el actor se trasladó hace más de 20 años, generando efectos jurídicos válidos hasta el día de hoy; indica que ésta administradora cumplió con el deber de administrar correctamente los dineros de la demandante, y gracias a su optima gestión, se generaron unos rendimientos financieros en la cuenta de ahorro individual de la demandante, y si se ordena el traslado de los rendimientos, no debió ordenarse el traslado de los gastos de administración, pues es por la gestión del fondo que se generaron los rendimientos, los cuales, al ser comparados con los gastos o cuotas de administración, estos últimos son una suma muy inferior a los rendimientos.

Por otro lado, la apoderada de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación manifestando que no está de acuerdo con lo manifestado por el juez de no trasladar los seguros previsionales, ya que lo declarado fue la ineficacia del traslado de régimen pensional y COLPENSIONES no debe asumir la pérdida por un acto de un tercero.

De igual forma, la sentencia será conocida en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del traslado concedido a las partes, ninguna de ellas hizo uso de este.

C O N S I D E R A C I O N E S:

Se procede a desatar los recursos de apelación interpuestos por COLPENSIONES y COLFONDOS S.A. en contra de la sentencia de

primera instancia e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: **i)** MARTHA ROCIO JIMÉNEZ VARGAS nació el 13 de julio de 1965¹; **ii)** se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cotizando allí desde el 9 de agosto de 1989²; **iii)** que el 31 de octubre de 1997³, se trasladó a COLFONDOS S.A., y **iv)** que el 21 de abril de 2003⁴, se trasladó a ING hoy PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

¹ Folio 13 de la demanda, 59 de la contestación de COLPENSIONES y 19 de la contestación de COLFONDOS S.A.

² Folio 59 de la contestación de COLPENSIONES

³ Folio 21 de la contestación de la demanda de COLFONDOS S.A. y folio 3 del PDF 11

⁴ Folio 30 de la contestación de PROTECCIÓN S.A.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁵, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida

⁵ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por sí solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;

- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, cuando laboraba al servicio de la Corporación San Isidro, se acercaron unos asesores de COLFONDOS S.A., los cuales le mencionando que el ISS se iba a acabar, y que la mejor opción era este fondo, indicándole solamente que podía adquirir el derecho a su pensión antes de la edad requerida y en las mismas condiciones del ISS, sin explicar los demás aspectos necesarios para cumplir con ese deber de información, situación similar ocurrió en el momento del traslado hacia PROTECCIÓN S.A., en el cual un asesor de este fondo le informo únicamente que

COLFONDOS estaba en una crisis, y que la mejor opción era PROTECCIÓN S.A., incumpliendo de igual forma el deber de información.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a la decisión del *a quo* de ordenar el traslado del saldo existente en la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros y las cuotas y/o gastos o comisiones de administración, pero sin incluir lo relacionado con los seguros previsionales y lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima, tema que fue objeto de apelación en el recurso interpuesto por COLPENSIONES, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con el traslado a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona,

teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

(...)

De otro lado, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en

establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... *aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...*".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **MODIFICADA** en el sentido de ordenarle tanto a la AFP PROTECCIÓN S.A. como a COLFONDOS S.A. a que procedan con el traslado de todos los conceptos recibidos durante el tiempo que la señora MARTHA ROCIO JIMÉNEZ VARGAS estuvo vinculada a cada una de estas entidades, incluyendo, como debe ser, las cuotas y/o gastos de administración, los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima.

Advirtiéndole que la orden a PROTECCIÓN S.A. y a COLFONDOS S.A. de trasladar todos los conceptos de cuotas de administración, seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva **indexación**, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, siendo esto procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, la Alta Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se reitera que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, tal y como lo señaló el juez.

Así las cosas, la sentencia de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y MODIFICADA.**

Las costas procesales de la segunda instancia serán a cargo de COLFONDOS S.A. por no salir avante el recurso de apelación, y como agencias en derecho se tasan en la suma de \$1'160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el día 24 de julio de 2023, pero la **MODIFICA** en el sentido de **CONDENAR** a COLFONDOS S.A y a PROTECCIÓN S.A., además de la devolución de los conceptos dichos por el juez, de las cuotas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes y lo destinado al fondo de garantía de pensión mínima, los cuales, al igual que las cuotas de administración, deberán ser debidamente indexados.

Costas procesales como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ac407a6a7cee283fb25be4c5c3bf5fb81588fb581fb6f2680ad4660512211443**

Documento generado en 03/11/2023 01:26:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>